

El momento que vivimos
en la democracia mexicana
Procesos locales y nacionales
a partir de las elecciones 2015

El momento que vivimos en la democracia mexicana

Procesos locales y nacionales
a partir de las elecciones 2015

Héctor Tejera Gaona
Emanuel Rodríguez Domínguez
Pablo Castro Domingo
(coordinadores)



Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Iztapalapa



Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Iztapalapa/División de Ciencias Sociales
y Humanidades
Departamento de Antropología
Juan Pablos Editor

México, 2016

APARTADO II
ANÁLISIS SUBNACIONALES Y ESTRUCTURAS
DE PODER LOCAL

Los riesgos de la democracia electoral en el Estado de México <i>Pablo Castro Domingo</i>	141
Las nuevas articulaciones faccionales en el escenario político de Jalisco durante las elecciones de 2015 <i>Jorge Federico Eufrazio Jaramillo</i>	163
Ni voto de castigo ni acarreo masivo. Fragmentación e incertidumbre en el voto magisterial en Veracruz en las elecciones de 2015 <i>Felipe Hevia de la Jara y Oswaldo Antonio González</i>	189
Alternancia partidista y pluralismo violento en Michoacán <i>Salvador Maldonado Aranda</i>	219
La elección en Guerrero ante los desafíos de las violencias <i>Gabino Solano Ramírez</i>	251

APARTADO III
LA DINÁMICA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Estructura política y procesos electorales en 2015: el caso de la Ciudad de México <i>Héctor Tejera Gaona</i>	287
Fragmentación partidaria y redes político-territoriales en la delegación Cuauhtémoc <i>Emanuel Rodríguez Domínguez</i>	311
¿Nuevos partidos viejas clientelas? Una mirada al realineamiento electoral en Tlalpan <i>Diana Guillén Rodríguez y Joel Ortega Erreguerena</i>	349
Coyoacán entre dos árbitros, del Instituto Electoral del Distrito Federal al Instituto Nacional Electoral <i>Martha Gallardo Sarmiento</i>	383

APARTADO IV
 REFORMA ELECTORAL Y NUEVOS ACTORES:
 PARIDAD DE GÉNERO, CANDIDATOS INDEPENDIENTES
 Y COMUNICACIÓN POLÍTICA

A golpe de sentencias: la interpretación jurisprudencial de la paridad de género en las elecciones de 2015 <i>Vanessa Góngora Cervantes</i>	417
Las promesas políticas de los candidatos independientes en las elecciones federales legislativas del año 2015 <i>Igor Vivero Ávila</i>	445
Publicidad política y estrategias de campaña en las elecciones legislativas intermedias federales de 2015 <i>Oniel Francisco Díaz Jiménez</i> <i>y Luis Antonio González Tule</i>	467
El Partido Verde Ecologista de México y las reiteradas violaciones a la norma electoral, ¿debilidad o complicidad institucionales? <i>Aldo Muñoz Armenta</i>	499

LA ELECCIÓN EN GUERRERO ANTE LOS DESAFÍOS DE LAS VIOLENCIAS*

*Gabino Solano Ramírez***

INTRODUCCIÓN

El proceso electoral para renovar los poderes locales del estado de Guerrero¹ en 2015 se desarrolló en un contexto de crisis política, detonada por la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en el municipio de Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Esta crisis se expresó en manifestaciones de violencia, medidas de presión y boicot, por parte del movimiento social que abanderó la demanda por la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos, para posponer la celebración de las elecciones de junio de 2015, por considerar que tanto el gobierno como los principales partidos políticos en la entidad —el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que gobernaba el municipio de Iguala y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que lo hacía en Cocula— estaban involucrados en estos hechos, de modo que la elección no resolvería el problema de fondo que motivó la tragedia.

* Este estudio fue preparado para presentarlo en el seminario “Democracia, cultura y ciudadanía en el contexto de las elecciones de 2015”, celebrado en la Universidad de Guanajuato, del 20 al 22 de agosto de 2015, Guanajuato, México.

** Universidad Autónoma de Guerrero.

¹ En este proceso se renovaron el ejecutivo local, 81 alcaldías, 46 diputaciones locales y nueve federales.

La crisis política emerge en un contexto de violencia criminal que data aproximadamente de 2007, cuando se incrementaron los homicidios y secuestros en la entidad. Este tipo de violencia afectó a los principales municipios de Guerrero (Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Chilapa, entre otros), llegando a ser una de las entidades con la más alta incidencia de criminalidad en el país, de acuerdo con fuentes oficiales (SENSP, 2016).

El crimen organizado no se ha circunscrito al control del mercado de drogas en el territorio guerrerense, todo indica que también se ha propuesto tener el control de las áreas de seguridad de las estructuras de gobierno, sobre todo en el ámbito municipal. Esta estrategia se hizo evidente en la escena donde policías municipales de Iguala y/o Cocula presuntamente actuaron como “sicarios” del crimen organizado en los sucesos de septiembre de 2014. También se tienen indicios de regiones —en particular donde se producen las drogas— controladas por el denominado “otro gobierno”,² es decir, donde las autoridades elegidas han perdido el control de algunas de sus funciones básicas, como la seguridad, el libre tránsito y el cobro de derechos frente a los grupos delictivos que controlan este territorio.

La convergencia de los poderes fácticos y el poder político, o la posibilidad de que el crimen organizado colonice y/o financie las estructuras del poder político, son variables explicativas de los sucesos de Iguala en 2014, suponen una falla del entramado político-institucional,³ que puede tener su origen tanto en el reclutamiento de la clase política gobernante; como también puede suceder en el ejercicio del gobierno. Sin embargo, el análisis de este fenómeno escapa a los propósitos de este ensayo, pero, sin duda, merece un estudio de mayor profundidad.

En este trabajo se da seguimiento a los dos desafíos que enfrentó el proceso electoral de 2015: a) la violencia criminal, en particular contra los actores políticos, y b) las protestas originadas por el movi-

² El columnista Miguel Ángel Mata señala que, tras los sucesos de Iguala, Guerrero, “los gobiernos municipales fueron *encuerados* en su cruda realidad. Están entregados a los jefes de las mafias regionales. El ‘otro gobierno’ es el que paga las nóminas de sus policías municipales” (Mata, 2015).

³ Dado que no hay indicios de que esta situación se haya modificado, es altamente probable que se registren en la entidad nuevos sucesos como los de

miento popular que se conformó tras los sucesos de Iguala. Ambos temas se desarrollan en los próximos apartados y por último, se incluyen algunas reflexiones tentativas.

EL DESAFÍO DE LA VIOLENCIA CRIMINAL

Guerrero es una entidad que registra múltiples formas de violencia de larga data política o institucional, social, guerrillera. A esta tradición se ha sumado, con mayor fuerza desde 2007, la violencia asociada al narcotráfico o violencia criminal, por la proliferación de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Un subproducto de este proceso es la violencia contra actores políticos, es decir, aquella que está dirigida contra los actores políticos o que sucede en el entorno de los procesos políticos-institucionales de la entidad. Sin entrar en el detalle de la delimitación conceptual,⁴ aquí se entiende por “violencia criminal” aquellas acciones delictivas atribuidas al crimen organizado, expresadas en agresiones violentas a la integridad física, limitaciones a la libertad de tránsito, amenazas, secuestro y desaparición de personas; mientras que por “violencia contra actores políticos” se refiere a las agresiones violentas atribuidas al crimen organizado que tiene como víctimas a los actores políticos, con algún cargo, que aspiran a uno o que participan en procesos electorales, esto es, un tipo de violencia que tiene consecuencias directas en los procesos políticos —electoral o de gobierno— y que se manifiesta a través de homicidios, secuestros o amenazas.

Iguala. Por ejemplo, a la fecha de conclusión de este trabajo, la prensa ha registrado otros casos de presuntas desapariciones en 2015: 26 personas en Chilapa y cuatro trabajadores de la Secretaría de Salud-Guerrero en la comunidad de Xolapa, del municipio de Acapulco.

⁴ Para el análisis de la violencia criminal y/o política, y la inseguridad asociada con estos fenómenos, existe una amplia literatura enfocada al contexto latinoamericano o nacional, véase por ejemplo: Imbusch, Misse y Carrión (2011); Arteaga Botello (2007); Moloeznik (2013); Torres-Rivas (1996); Aróstegui (1996); Valdez y Paniagua (2011); Hernández Norzagaray (2010); Guerrero (2014, 2015); así como informes de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otras.

Los índices de violencia en Guerrero han sido los más altos del país en los últimos años. Los reportes de victimización y violencia a 2015, reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ubican a la entidad en los primeros lugares en el nivel nacional en muertes por homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes (56 frente a 14 del promedio nacional); con datos de 2013, la entidad también lidera en porcentaje de delitos que no se denuncian o para los que no se inició una averiguación previa —cifra negra del delito— (96.7%); ocupa el octavo lugar nacional en porcentaje de la población que se siente insegura (78.9 frente a 73.3% nacional) y el cuarto lugar en porcentaje de delitos en los que los delinquentes portaron un arma de fuego (72.9 frente a 68.1% nacional), (SESNSP, 2016; INEGI, 2014; Solís y Chapa, 2014).

En el plano municipal, según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, A.C., en 2014 Acapulco ocupaba el tercer lugar en el nivel mundial —dentro de las 50 ciudades más peligrosas del mundo—, con una tasa de 113 homicidios por cada cien mil habitantes.⁵ Otro estudio (Guerrero, 2015) también ubica a Acapulco a la cabeza de los diez municipios mexicanos con más ejecuciones en 2014, donde además aparecen otros dos municipios guerrerenses: Chilpancingo e Iguala (véase la gráfica 1).

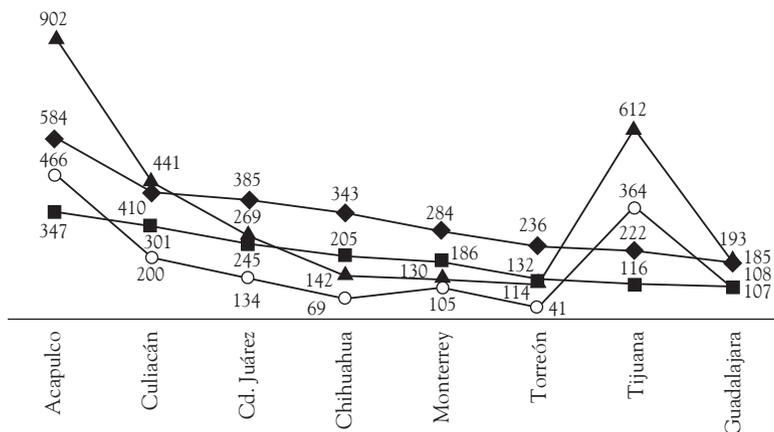
El mapa geodelictivo estatal, o la violencia vinculada al crimen organizado está presente en todas las regiones de la entidad, si se consideran las notas sobre el fenómeno de la violencia que registra la prensa escrita estatal en el último año, no hay algún municipio relevante que escape a este fenómeno y sólo 19 municipios pequeños aún no registran presencia criminal importante. Entre los más afectados sobresalen —además de Acapulco, Chilpancingo e Iguala—: Chilapa, Ahuacuotzingo, Pungarabato (Ciudad Altamirano), San Miguel Totolapan, Teloloapan, Tlapa, Apaxtla de Castrejón, Heliodoro Castillo, Juan R. Escudero, Coyuca de Benítez, Coahuayutla, La Unión, Zihuatanejo de Azueta, Taxco de Alarcón y Tecoaapa.

Este escenario es resultado de la proliferación de bandas del crimen organizado que mantienen operaciones en la entidad, “un mosaico

⁵ El primer lugar lo ha ocupado por tercera vez consecutiva, San Pedro Sula con 187 homicidios por cada cien mil habitantes; el segundo lugar es Caracas, Venezuela con 134 por cada cien mil habitantes.

de organizaciones criminales” único en el país, un total de 22 según Eduardo Guerrero (2014), seis organizaciones con presencia nacional (Michel y Trujillo, 2014) y grupos locales que son subdivisiones o células de las grandes organizaciones, “la mayoría tienen su origen en la organización de los hermanos Beltrán Leyva (Los Pelones, Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Ardillos y Nuevo Cártel de la Sierra, entre otros), algunos otros asociados a La Familia Michoacana, el cártel Jalisco-Nueva Generación y Los Caballeros Templarios⁶ (véase la tabla 1).

GRÁFICA 1
MUNICIPIOS MEXICANOS CON MAYOR NÚMERO DE EJECUCIONES, 2013-2016



FUENTE: Eduardo Guerrero (2015).

La “balcanización” del territorio guerrerense ha sido favorecida por la captura de los líderes más importantes de los principales cárteles de las drogas en el país, lo que ha permitido que los cabecillas locales construyan su propia red delictiva en las localidades que tienen bajo su control, o son aprovechadas por las bandas rivales para capturar estos territorios. Así, el debilitamiento de las grandes organizaciones

⁶ *El Financiero*, 17 de julio de 2015, disponible en <<http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-chapo-va-por-mas-poder-especialistas.html>>.

ha dado lugar a nuevos grupos locales con fronteras de influencia difusa y variante en el corto plazo, lo que ha convertido a buena parte del territorio guerrerense en “zonas de caza”, espacio de confrontaciones violentas entre bandas criminales por el control de localidades, ciudades o municipios. Ejemplo de ello son las cruentas disputas entre Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Ardillos y La Familia Michoacana, por el control de los municipios de Iguala, Chilpancingo, Taxco, Heliodoro Castillo, Huitzucó, Eduardo Neri, Chilapa, Ahuacuatzingo y Quechultenango, lo cual ha elevado la incidencia de homicidios, desapariciones y secuestros en las regiones centro y norte de la entidad (Kyle, 2015; Michel y Trujillo, 2014).

En el caso particular de Acapulco, el municipio guerrerense emblemático de la violencia, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado operan cinco grupos importantes que se disputan el control territorial: el Cártel Independiente de Acapulco, Los Ardillos, Los Rojos, La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación.⁷

Las numerosas células o subgrupos delictivos que operan en Guerrero tienen una autonomía relativa de las grandes organizaciones, pero sin capacidad de participar en el mercado internacional o nacional de drogas, por lo que compiten por el control de otras actividades delictivas, tales como “la extorsión (en su modalidad de ‘cobro de piso’ a comerciantes, empresarios e incluso jornaleros y profesionistas)”, secuestros, tráfico de personas, lavado de dinero y narcomenudeo (Guerrero, 2014). Aquí es donde resulta relevante la influencia que estos grupos delictivos pueden tener en las estructuras de gobierno municipal —de manera particular en los aparatos de seguridad—, el nivel de gobierno con mayor debilidad institucional, reflejada en acciones permisivas que favorecen el incremento de incidencias delictivas, así como la manifiesta incapacidad para combatir las o prevenirlas. Esta situación ha sido reconocida tanto por el gobierno estatal, como por las autoridades federales,⁸ evidenciada en medios de informa-

⁷ *El Universal*, “Acapulco ya es ciudad más violenta del país”, 4 de agosto de 2015, disponible en <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2015/08/4/acapulco-ya-es-ciudad-mas-violenta-del-pais>>.

⁸ El ex gobernador Ángel Aguirre, tras los sucesos de Iguala, reconoció “la infiltración de la delincuencia en varios municipios. Desde ahora estamos exi-

TABLA I
 PRINCIPALES ORGANIZACIONES DEL CRIMEN ORGANIZADO
 EN GUERRERO A OCTUBRE DE 2014

<i>Organizaciones nacionales</i>			
<i>Organizaciones</i>	<i>Número de municipios</i>	<i>Zona de influencia (regiones)</i>	<i>Principales municipios</i>
Cártel de los Beltrán Leyva	5	Costa Grande, Centro y Acapulco	Acapulco, Atoyac, Coyuca de Benítez, Chilpancingo y Tixtla
La Familia Michoacana	4	Tierra Caliente y Acapulco	Arcelia, Teloloapan y Cuetzala del Progreso, Acapulco
Los Caballeros Templarios	4	Tierra Caliente y Costa Grande	Zirándaro, Cutzamala del Pinzón, La Unión, Coyuca de Catalán
Cártel Jalisco Nueva Generación	2	Costa Grande y Acapulco	Petatlán, Acapulco
<i>Organizaciones locales</i>			
Guerreros Unidos / Fuerza Guerrerense	7	Costa Grande y Norte	Cocula, Arcelia, Iguala Zihuatanejo, Coahuayutla, La Unión, Taxco.
Los Rojos (escisión de los Beltrán Leyva)	8	Centro Montaña	Chilpancingo, Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo, Juan R. Escudero, Eduardo Neri, Acapulco, Tlapa de Comonfort
Los Ardillos (escisión de los Beltrán Leyva)	8	Centro	Quechultenango, Tixtla, Acapulco, Ahuacotzingo, Chilapa, Chilpancingo, Mochitlan, Zitlala
Cártel Independiente de Acapulco	1	Acapulco	Acapulco

TABLA 1 (CONTINUACIÓN)

Los Tequileros	1	Tierra Caliente	San Miguel Totolapan
Otros: Los Granados, Los Pelones, Nuevo Cártel de la Sierra	4	Norte, Centro y Costa Grande	Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Taxco, Tecpan de Galeana

FUENTE: elaboración propia con datos de Michel y Trujillo (2014), Guerrero (2014), diarios locales y nacionales.

ción⁹ o aceptada por los propios líderes criminales.¹⁰ Sin embargo, de los señalamientos hasta ahora conocidos, sólo han sido detenidos tres ex presidentes municipales y uno en funciones: el ex alcalde de Iguala,

giendo que, con el apoyo del gobierno federal, en aquellos casos que logremos acreditar que hay policías como en Iguala podamos actuar pronto y de manera resuelta”, en *Milenio Diario*, 17 de noviembre de 2014, disponible en <http://m.milenio.com/politica/12_alcaldes_de_Guerrero_bajo_lupa_antinarco-alcaldes_relacionados_con_el_narco_0_410958901.html>; en el mismo sentido declaró el gobernador sustituto Rogelio Ortega: “Hay información de que algunos elementos de la Policía Municipal están ligados con la delincuencia”, 29 de junio de 2015, disponible en <<http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/policia-municipal-de-acapulco-ligada-con-la-delincuencia-ortega/20150629/nota/2827960.aspx>>; y el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, reconoció que las policías municipales de Guerrero daban protección a Gildardo López Astudillo, lugarteniente de Guerrero Unidos, 20 de septiembre de 2015, disponible en <<http://suracapulco.mx/archivos/305743>>.

⁹ “12 alcaldes de Guerrero pueden tener vínculos con diferentes grupos criminales, ya por voluntad propia o debido a actos de coerción de asociaciones delictivas”, en *Milenio Diario*, 17 de noviembre de 2014, disponible en <http://m.milenio.com/politica/12_alcaldes_de_Guerrero_bajo_lupa_antinarco-alcaldes_relacionados_con_el_narco_0_410958901.html>; “Ernesto Gallardo, coordinador regional del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la UPOEG, acusó a Elizabeth Gutiérrez Paz, alcaldesa de Juan R. Escudero, Guerrero, a su esposo, Adán Sandoval, y al secretario de seguridad municipal de pertenecer al crimen organizado”, en *El Economista*, 18 de noviembre de 2014, disponible en <<http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/11/18/acusan-alcaldesa-ser-crimen-orga-nizado>>.

¹⁰ “La organización criminal de ‘Guerreros Unidos’ recibe protección de nueve presidentes municipales”, declaración de Gildardo López Astudillo, lugar-

José Luis Abarca Velázquez (por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y su vínculo con el cártel Guerreros Unidos); de Cuetzala del Progreso, Feliciano Álvarez Mesino (por nexos con el cártel de La Familia Michoacana); de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana (por su presunta relación con el cártel Guerreros Unidos), y en febrero de 2016 el presidente municipal de Cocula, Erick Ulises Ramírez (por presuntos vínculos con el cártel Guerreros Unidos).

Las luchas por el control de los municipios se vinculan con el proceso político durante la coyuntura electoral para renovar los poderes municipales. Si el municipio está en disputa es probable que emerjan acciones delictivas con el propósito de influir, en un primer momento, en el nombramiento de las candidaturas, y, posteriormente, en la designación de los responsables de la seguridad pública. Tal es el desafío que la violencia criminal impone al entramado político institucional.

LA VIOLENCIA CONTRA ACTORES POLÍTICOS

En la disputa por el control de los pequeños territorios locales se ubica la conexión de la violencia criminal y la violencia contra actores políticos, que tiene su mayor incidencia contra los titulares de las presidencias municipales. En este sentido, la Federación Nacional de Municipios de México (Fenam) registró, de 2008 a 2011, 126 amenazas y 23 homicidios de alcaldes; Guerrero se ubica entre las entidades con mayor incidencia de este fenómeno, junto a Oaxaca, Durango, Chihuahua, Michoacán y Nuevo León. En tanto que la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) ha registrado 73 asesinatos de alcaldes en los últimos diez años, seis de esos casos ocurrieron hasta julio de 2015.

En el caso de Guerrero, la violencia criminal contra actores políticos locales parece coincidir con las disputas territoriales entre las organizaciones del crimen organizado. En otro sentido, la lucha por el control territorial se asocia con la competencia política por el control o influencia de los gobiernos municipales, de este modo la violencia criminal afecta el proceso político institucional. Cualesquiera que sean

teniente de Guerreros Unidos, en *Novedades Acapulco*, 19 de septiembre de 2015, p. 4B.

los factores explicativos que favorecen este tipo de violencia, el propósito es mantener el control político o influir en la definición de quienes aspiran u ocupan cargos de representación o de gobierno en el ámbito municipal. Este tipo de violencia permea a todos los partidos políticos y, de alguna manera, ha modificado pautas de comportamiento de los actores políticos, generando situaciones de temor, miedo, abandono de las aspiraciones políticas, sensación de impunidad, repercusiones que deberán ser objeto de estudio con mayor profundidad.

La incidencia delictiva contra actores políticos locales se construyó a partir del monitoreo de la prensa estatal de 2008 a 2016¹¹ (véase la tabla 2). Según este registro han ocurrido 150 incidencias violentas (65 homicidios, 40 secuestros y 45 amenazas o atentados) contra actores políticos que ocupaban o aspiraban a ocupar un cargo político o de representación, formaban parte de los equipos de campañas de los candidatos o eran dirigentes partidistas. Estas acciones se han registrado en 47 de los 81 municipios del estado, incluidos los más significativos en términos demográficos y económicos: como Acapulco, con el número de incidencias más alta (16); Chilpancingo (15); Iguala y San Miguel Totolapan (8); Atoyac y Coyuca de Catalán (todos con siete casos); Ometepe y Pungarabato (con seis registros); Zihuatanejo y Teloloapan con cinco casos. En suma, 26 municipios han registrado homicidios, en 27 secuestros y en 24 amenazas; en 19% de estos municipios se han registrado los tres indicadores.

La mayor incidencia de acciones delictivas contra actores políticos coincide en los municipios en disputa entre las organizaciones criminales, por ejemplo, Guerreros Unidos, La Familia Michoacana y Los Rojos pelean por el control de Iguala, Teloloapan, Apaxtla, Arcelia, Cutzamala del Pinzón y San Miguel Totolapan;¹² al menos cinco

¹¹ Escapan a esta enumeración los casos no registrados por la prensa, por ejemplo: candidaturas que se retiraron por amenazas no denunciadas, como una advertencia del crimen organizado a los candidatos para presionarlos a abandonar sus aspiraciones o dejar el “campo libre” a candidaturas colaboracionistas para sus operaciones cotidianas, salvaguardar su vida se impone a la aspiración política, información disponible en <<http://bajopalabra.mx/2015/05/22/violencia-en-guerrero-podria-estar-siendo-azuzada-desde-las-campanas/>>.

¹² El gobernador Rogelio Ortega reconoció que “las zonas más riesgosas del estado son Chilapa, Teloloapan, San Miguel Totolapan y Arcelia, [por ser] espacio

TABLA 2
 INCIDENCIA DE VIOLENCIA CONTRA ACTORES POLÍTICOS POR
 MUNICIPIOS EN GUERRERO (2008-2016)

Núm.	Municipios	Homicidios	Secuestros	Amenazas	Total
1	Acapulco de Juárez	9		7	16
2	Acatepec			1	1
3	Ahuacuotzingo	1	1	1	3
4	Ajuchitlán del Progreso	1	2		3
5	Apaxtla de Castrejón		1		1
6	Atlixac			1	1
7	Atoyac de Álvarez	5	1	1	7
8	Ayutla de los Libres	2			2
9	Benito Juárez	1			1
10	Chilapa de los Álvarez	1	1	1	3
11	Chilpancingo de los Bravo	5	2	8	15
12	Coahuayutla de José María Izazaga	1			1
13	Coyuca de Benítez	1	1		2
14	Coyuca de Catalán	5	2		7
15	Cualác	1	2		3
16	Cuetzala		1	1	2
17	Cutzamala de Pinzón	2	1		3
18	Cocula			2	2
19	Copalillo			2	2
20	Copanatoyac			1	1
21	Cuajinicuilapa	1		1	2

TABLA 2 (CONTINUACIÓN)

<i>Núm.</i>	<i>Municipios</i>	<i>Homicidios</i>	<i>Secuestros</i>	<i>Amenazas</i>	<i>Total</i>
22	Cuetzala del Progreso			1	1
23	Florencio Villarreal	1			1
24	General Canuto A. Neri		1		1
25	Huamuxtlán		3	1	4
26	Huitzuc de Figueroa		2		2
27	Helidoro Castillo	1			1
28	Iguala de la Independencia	6	1	1	8
29	Juan R. Escudero		2		2
30	Malinaltepec		1		1
31	Marquelia		1		1
32	Metlatónoc	1			1
33	Olinalá		1		1
34	Ometepec	3	1	2	6
35	Petatlán	2			2
36	Pungarabato		2	4	6
37	San Luis Acatlán			1	1
38	San Miguel Totolapan	3	4	1	8
39	Taxco de Alarcón	1		2	3
40	Técpán de Galeana	1	1	1	3
41	Teloloapan	2	2	1	5
42	Tixtla de Guerrero		1	1	2
43	Tlalixtlaquilla de Maldonado			1	1
44	Tlapa de Comonfort	1		1	2
45	Tlapehuala		1		1

TABLA 2 (CONTINUACIÓN)

Núm.	Municipios	Homicidios	Secuestros	Amenazas	Total
46	Zapotitlán Tablas	2			2
47	Zihuatanejo de Azueta	5			5
48	Zitlala		1		1
	Total	65	40	45	150

FUENTE: elaboración propia con datos de diarios de Guerrero: *El Sur*, *La Jornada Guerrero*, *Novedades Acapulco*.

organizaciones criminales se disputan Acapulco; y la zona de influencia de Chilapa (Ahuacuotzingo, Zitlala, Acatepec) la pelean Los Rojos, quienes controlan el territorio, y Los Ardillos, que lo disputan. Este escenario mantiene a numerosos municipios de la entidad como “focos rojos” por los niveles de inseguridad y violencia, lo cual convierte a la política en una actividad peligrosa en Guerrero.

En el caso de las acciones de violencia contra actores políticos, atribuidas al crimen organizado, registradas en el proceso electoral de 2015, confirman su conexión con la disputa que mantienen las organizaciones del crimen organizado en prácticamente toda la entidad, con excepción de la región Costa Chica, donde la prensa no registró este tipo de incidencias (véase la tabla 3).

Entre los municipios más afectados, sobresalen los que se registraron en el contexto de la disputa por el control de Chilapa,¹³ muni-

de disputa territorial entre bandas delincuenciales, vinculadas al narcotráfico”, en *almomentonoticias*, 1 de junio de 2015, disponible en <<http://www.almomento.mx/estado-de-los-estados-violencia-contra-votos/>>.

¹³ Chilapa se ubica entre los seis municipios de Guerrero que rebasan los 100 mil habitantes, en orden descendente: Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Chilapa, Zihuatanejo y Taxco; a través de la carretera federal 93 se enlaza con Chilpancingo, municipio capital, y hacia la región de La Montaña con Tlapa de Comonfort, el municipio más importante de esta región. En el área de influencia económica de Chilapa se encuentran los municipios de Ahuacuotzingo, Zitlala, Mártir de Cuilapan, José Joaquín de Herrera, Atlixac, Acatepec, Tixtla y Quechultenango, municipios que tienen un alto componente poblacional hablante de lengua indígena y con bajos índices de desarrollo (INEGI, 2010).

TABLA 3
VIOLENCIA ELECTORAL EN GUERRERO, 2015

<i>Partido</i>	<i>Nombre</i>	<i>Fecha</i>	<i>Postulación al cargo</i>	<i>Lugar de la violencia</i>	<i>Hechos</i>
PAN	Jorge Camacho	06/04/15	Gobernador	Tixtla	Quema de llantas de vehículos de equipo de campaña
PRD	Aidé Nava González	10/03/15	Aspirante a la candidatura a alcaldesa	Ahuacuotzingo, secuestrada dos días antes del homicidio	Homicidio
PRI	Ulises Fabián Quiroz	01/05/15	Alcalde	Chilapa	Homicidio
PRD	Francisco López Liborio	09/06/15	Líder social y administrador fiscal del estado	Iguala	Homicidio
Panal	Cuatro simpatizantes de la candidata	30/04/15	Militantes, después de mitin político	Pedro Ascencio Alquisiras	Homicidio
MC	Luis Walton	25/04/15	Gobernador	Chilapa	Amenaza
PAN	Equipo de Jorge Camacho	22/05/15	Gobernador	Coyuquilla, Petatlán	Amenaza
PAN	Guillermo Cisneros Chegüe	18/02/15	Ex regidor	Acapulco	Homicidio
MC	Leticia Maganda Sánchez*	22/05/15	Diputada local por el distrito 02	Chilpancingo	Amenaza

TABLA 3 (CONTINUACIÓN)

<i>Partido</i>	<i>Nombre</i>	<i>Fecha</i>	<i>Postulación al cargo</i>	<i>Lugar de la violencia</i>	<i>Hechos</i>
Morena	Valentina Rosendo Cantú*	10/05/15	Alcaldesa de Acatepec	Chilapa	Atentado
PRD	Juan Mendoza Acosta	05/05/15	Alcalde de San Miguel Totolapan	San Miguel Totolapan	Secuestro
PRD	Silvia Romero Suárez	12/05/15	Diputada local plurinominal	Entre Cutzamala de Pinzón y Teloloapan	Secuestro
PRI	Equipo de Astudillo	22/04/15	Gobernador (no asistió)	Tlapa	Comité promotor del Consejo Popular Municipal de Tixtla impide acto político
PRI	Héctor Astudillo	30/05/15	Gobernador	Tlapa-Chilapa	Cierre de carretera, quema de propaganda en cierre de acto de campaña
PRI	Héctor Astudillo	30/05/15	Gobernador	Acapulco	Detención de un miembro del crimen organizado en cierre de campaña

TABLA 3 (CONTINUACIÓN)

<i>Partido</i>	<i>Nombre</i>	<i>Fecha</i>	<i>Postulación al cargo</i>	<i>Lugar de la violencia</i>	<i>Hechos</i>
PRI	Domingo Barrera Jiménez	20/03/15	Aspirante a la candidatura a alcalde	Atenango del Río	Atentado
MC	Luis Walton	20/04/15	Gobernador	Huamuxtlán	Irrupción del MPG
MC	Cipriano Ólea Estrada, Ángel Vergara Chamú, Leticia Vélez	27/04/15	Alcaldes	San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y Atenango del Río	Amenazas
Morena	Laura Patricia Hernández**		Alcaldesa	Chilapa	Amenaza
Morena	Pablo Amílcar Sandoval	06/03/15	Gobernador	Tlapa	Irrupción del MPG
Morena	Pablo Amílcar Sandoval. (con visita de López Obrador)	21/05/15	Gobernador	Tlapa	Irrupción del MPG. Quema de propaganda
PAN	José Alberto Slim Tirado	17/18/15	Ex candidato a alcalde	San Miguel Totolapan	Secuestro
PRI	José Felipe de la Paz	27/06/15	Regidor	San Miguel Totolapan	Secuestro

TABLA 3 (CONTINUACIÓN)

<i>Partido</i>	<i>Nombre</i>	<i>Fecha</i>	<i>Postulación al cargo</i>	<i>Lugar de la violencia</i>	<i>Hechos</i>
PRI	Guadalupe García Rayo	27/06/15	Regidor	Ajuchitlán del Progreso	Secuestro
PRD	Gregorio Aguirre Nicanor y seis familiares	21/09/15	Secretario general del ayuntamiento	Ajuchitlán del Progreso	Secuestro

* Renuncian a su postulación después del atentado.

** Renunció a su postulación por amenazas del grupo de autodefensa de Ayahualulco de no permitir el acceso a candidatos de ese partido, advirtiéndole que no podrían hacer campaña.

FUENTE: elaboración propia con datos de diarios de Guerrero: *El Sur*, *La Jornada Guerrero*, *Novedades Acapulco*.

cipio estratégico por ser el punto de conexión, epicentro comercial y de movilidad, entre la región Centro y la Montaña, punto de tránsito hacia el estado de Puebla; lo que ubica a Chilapa como un centro regional de primera importancia para el comercio ilegal de drogas entre Guerrero y Puebla.

En diversos medios de comunicación se ha señalado la vinculación del poder político en Chilapa con la organización criminal Los Rojos,¹⁴ situación que ha potenciado el clima de violencia en el último año y, en particular, durante el proceso electoral de 2015. Los hechos más importantes que asocian estos dos fenómenos —control de la plaza y control político— son los siguientes:

1. La acción más visible fue la irrupción de civiles armados —presuntos policías comunitarios— en la cabecera municipal del 9 al 14 de mayo, encabezados por comisarios rurales del municipio, bajo las demandas de cambiar al secretario de seguridad pública y que la policía estatal asumiera la seguridad en sus comunidades; a la policía municipal le cuestionan sus vínculos con Los Rojos, a quienes les atribuyen la desaparición de 30 personas de diversas localidades; los “policías comunitarios” realizaron detenciones de personas presuntamente vinculadas con el grupo criminal Los Rojos. El alcalde municipal, Francisco Javier García González, atribuyó este hecho al “enfrentamiento entre los grupos de la delincuencia organizada”, es decir, ubicó su origen en la organización de Los Ardillos. Tras la negociación con el gobierno estatal, los civiles armados dejaron la cabecera municipal y la policía estatal asumió las tareas de seguridad, con un nuevo responsable de la seguridad en el municipio. Los comisarios que participaron en este hecho se han autodenominado “Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia”, con la misma advertencia de que si no mejoran las condiciones de seguridad podrían regresar a tomar la ciudad de Chilapa.

¹⁴ “El portal de la revista *Proceso* informó que en [la Red social] YouTube un retenido por hombres armados acusó al alcalde priísta de Chilapa, Francisco Javier García González, de tener nexos con el líder de Los Rojos en la zona, Zenén Nava Sánchez, El Chaparro”, en *El Sur*, 23 de julio de 2014, disponible en <<http://suracapulco.mx/archivos/185373>>.

pa; al respecto las autoridades federales comisionadas en la zona les han advertido que no permitirán una nueva incursión de esta naturaleza.¹⁵

2. Los hechos de mayor impacto fueron los homicidios de la aspirante a la candidatura para la presidencia municipal de Ahuacutzingo por el PRD, Aidé Nava González, y del candidato a presidente municipal de Chilapa por el PRI, Ulises Fabián Quiroz; así como las amenazas a las candidatas de Morena para la presidencia municipal de Chilapa, Laura Patricia Hernández, y Acatepec, Valentina Rosendo Cantú, lo que motivó que ambas renunciaran a su postulación y se retiraran de la competencia electoral.

El homicidio de Aidé Nava González fue atribuido al cártel de Los Rojos.¹⁶ Fue el corolario de las agresiones perpetradas a su familia: primero, el 11 de octubre de 2012, su hijo, Francisco Quiñones Nava, fue secuestrado y aún permanece en calidad de desaparecido; posteriormente, su esposo, Francisco Quiñones Ramírez, ex alcalde perredista de Ahuacutzingo (2009-2012), fue asesinado el 28 de junio de 2014. Francisco Quiñones había sido señalado por el líder perredista Ranferi Hernández Acevedo de tener nexos con el crimen organizado.¹⁷ La pareja Quiñones-Nava tenía planeado competir por el poder político en 2015, Francisco por la diputación local y Aidé por la al-

¹⁵ “El delegado en Guerrero de la Secretaría de Gobernación, Erick Castro Ibarra, aseguró que las autoridades federales no permitirán que civiles armados vuelvan a tomar la cabecera del municipio de Chilapa”, 18 de septiembre de 2015, disponible en <<http://bajopalabra.mx/2015/09/18/no-se-permitira-que-armados-vuelvan-a-tomar-chilapa-segob/>>.

¹⁶ Junto al cuerpo de Nava González fue encontrado el mensaje: “Esto le va a pasar a todos los putos políticos que no se quieran alinear, putos chapulines. Atte. Puros Rojos ZNS”, 11 de marzo de 2015, disponible en <<http://www.sinembargo.mx/11-03-2015/1277663>>.

¹⁷ “El activista político explicó que el pasado 06 de octubre de 2011, el presidente municipal permitió el acceso a personas armadas a un baile que se celebraba en ese lugar, incluso lo acusó de haber corrido al comandante de la policía, porque no les permitía el paso”, 28 de junio de 2014, disponible en <<http://www.libertadguerrero.net/2014/06/matan-francisco-quinones-exalcalde-de.html>>.

caldía municipal, por lo cual algunos dirigentes perredistas ubicaron el origen del homicidio en las diferencias políticas que Francisco y Aidé tenían con el alcalde priísta Daniel Hernández Casarrubias.¹⁸ Tras el homicidio de Nava González, la candidatura perredista fue asignada a Glorinda Casarrubias Nava, quien perdió la elección frente a Gerzaín Hernández Casarrubias, hermano del presidente municipal saliente (PRI),¹⁹ quien contendió por el PAN al no obtener la nominación en el Partido Revolucionario Institucional.

El homicidio del candidato priísta a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián, también parece tener su origen en la batalla por el control político de Chilapa entre Los Rojos y Los Ardillos. Lo cual conecta el homicidio con el de Aidé Nava, pues en ambos casos se especuló su relación con el narcotráfico.²⁰ Aunque Fabián Quiroz no tuvo señalamientos públicos por nexos con alguna banda criminal, sí los ha tenido quien lo promovió en su carrera política, el alcalde saliente Francisco Javier García González, del cual fue tesorero durante su administración municipal. Ejemplos de la penetración de Los Rojos en el gobierno de García González (2012-2015) han sido: la detención, en noviembre de 2013, del oficial mayor, Vicente Jiménez Aranda, “señalado como integrante de Los Rojos y acusado del secuestro de un empresario de Chilpancingo”;²¹ y la demanda de los “policías comunitarios”, de destituir al jefe de la policía municipal por su nexo con esta organización criminal.

El PRI en Chilapa, al igual que el PRD en Ahuacuotzingo, centró la causa del homicidio de Fabián Quiroz en el grupo político contra-

¹⁸ *El Sur*, 29 de junio de 2014, disponible en <<http://suracapulco.mx/archivos/171335>>.

¹⁹ El presidente municipal, Daniel Hernández Casarrubias, fue señalado por dirigentes perredistas de estar involucrado en el homicidio de Aidé Nava, información aparecida el 12 de marzo de 2015, disponible en <<http://suracapulco.mx/archivos/259327>>.

²⁰ “El narcotráfico es una de las líneas de investigación ‘más fuertes’ que sigue la Fiscalía General del Estado de Guerrero sobre el asesinato del candidato del PRI-PVEM a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz”, en CNN México, 8 de mayo de 2015, disponible en <<http://mexico.cnn.com/adnpolitico/2015/05/08/narco-linea-de-investigacion-sobre-el-asesinato-del-candidato-en-chilapa>>.

²¹ *Agencia APRO*, 14 de julio de 2014, disponible en <<http://www.am.com.mx/leon/mexico/guerrero-el-nuevo-campo-de-batalla-125457.html>>.

rio, en este caso el candidato perredista Miguel Cantorán Gatica, quien fue acusado a través de pintas y mantas —que aparecieron hasta el municipio de Tlapa— de orquestar este homicidio con su grupo armado.²² La candidatura priísta a la alcaldía de Chilapa estuvo sin titular varios días debido a la negativa de asumirla por quienes se mencionaban como probables sustitutos, entre ellos la diputada local Alicia Zamora y el propio suplente de Fabián Quiroz, José Santos Valdivia, incluso se especuló la posibilidad de que no se celebrara la elección local. Finalmente, fue designado Jesús Parra García, quien era secretario particular del presidente saliente. No hubo sorpresas, el “linchamiento” mediático del candidato perredista prácticamente lo eliminó de la competencia, la elección constitucional la ganó el PRI, lo cual le garantizaba al grupo de García González el control político de este municipio, al menos por otro periodo de gobierno.

No obstante, el homicidio de Ulises Fabián, como el de Aidé Nava —el de su esposo y el secuestro de su hijo— aún forma parte de la larga lista de este tipo de delitos sin resolver en Guerrero.

El proceso electoral de 2015 no modificó la correlación de fuerzas en Chilapa, ni en Ahuacutzingo. Los grupos políticos que gobiernan estos municipios mantendrán la continuidad por medio de los alcaldes electos (en el caso de Ahuacutzingo, Hernández Casarrubias lo hará a través del PAN). Así, la violencia contra actores políticos en este proceso electoral reflejó el nivel de confrontación entre las bandas criminales rivales y fue instrumentada o utilizada para favorecer las aspiraciones de uno u otro grupo político. El proceso electoral en sí mismo no es el objeto de la violencia criminal, pues les resulta útil para ampliar el control o la influencia, en el ámbito del poder político, que han alcanzado en lo económico, como producto de sus actividades ilegales (Fernández, 2014). Es decir, el proceso electoral parece ser un medio que legitima el control político de las organizaciones criminales. De ello se deduce que los grupos políticos locales, aparentemente sean permisivos u omisos a la actividad delincuencia, articulando una

²² “Con pintas, acusan a candidato del PRD del asesinato de Ulises Quiroz”, 3 de mayo de 2015, disponible en <<http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/con-pintas-acusan-a-candidato-del-prd-por-el-asesinato-de-candidato-priista.html>>.

compleja red de complicidades e impunidad. Hipótesis a profundizar en una investigación más amplia.

EL DESAFÍO DE LA VIOLENCIA SIMBÓLICA

El desafío más importante al proceso político-electoral de 2015 en Guerrero provino de las intensas protestas populares por la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre por la policía municipal de Iguala y Cocula en colaboración con “sicarios” de la organización criminal Guerreros Unidos. La demanda inicial era contundente: no celebrar las elecciones de junio de 2015, por considerar que los actores políticos más importantes de la entidad, de alguna manera, tenían responsabilidad de lo que había acontecido aquella noche trágica en Guerrero.²³ En el país se prendieron las alarmas debido a la alta probabilidad de que esto sucediera.

El movimiento popular que abanderó la demanda de la presentación con vida de los normalistas se integró por una amplia coalición de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, estudiantiles, sindicales, defensoras de derechos humanos, autodefensas y policías comunitarias, entre otras; la mayoría de ellas se agruparon en la Asamblea Nacional Popular (ANP), en Guerrero se denominó Movimiento Popular Guerrerense (MPG), este colectivo definió las acciones políticas de protesta en el último año, la mayoría de las veces desde la sede de la escuela normal, en el municipio de Tixtla. Las principales organizaciones que encabezaron las movilizaciones fueron el Comité de Padres de Familia de los 43 Estudiantes Desaparecidos; el Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa (CE-A); la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg); el Frente Único de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG); la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM); la Unión de Pueblos y Orga-

²³ La fraseología con la que se denomina este suceso es diversa, la mayoría carga con sesgos ideológicos o políticos: “La tragedia de Iguala”, “Los sucesos de Iguala”, “La desaparición forzada de estudiantes normalistas”, “Los sucesos de Ayotzinapa”, “La crisis de Ayotzinapa”, entre otros.

nizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). En total, la Asamblea Nacional Popular sumó más de cien organizaciones que se movilizaron en Guerrero, en el país y en el extranjero.

Las acciones de protestas realizadas por el movimiento de protesta con la exigencia de justicia para los estudiantes desaparecidos configuraron un amplio abanico de medidas con diverso grado de intensidad. La protesta inicialmente fue pacífica, se realizaban marchas, mítines o concentraciones informativas, pero fueron creciendo en violencia en la medida en que las investigaciones sobre los estudiantes desaparecidos no ofrecían los resultados esperados, en particular las que se enfocaron contra instalaciones representativas del poder político: la ocupación o incendio de edificios del gobierno estatal, de algunos municipios, del Congreso local, así como de los principales partidos políticos. No escaparon a esta ola de protestas las sedes de organismos electorales, las casetas de la Autopista Acapulco-Cuernavaca, carreteras federales, tiendas de autoservicio, sucursales bancarias, camiones distribuidores de mercancías, transporte público y policiaco, trabajadores de empresas privadas fueron retenidos como rehenes, radiodifusoras, entre otros.

La solidaridad con los normalistas y la condena internacional creció. La presión política por presentar culpables amenazaba con afectar al gobierno federal, que había reaccionado tardíamente a los sucesos, tenía la urgencia de dar respuestas. A un mes de las protestas, desde el gobierno federal, en acuerdo con el partido en el gobierno en Guerrero (PRD), se definió la salida de Ángel Heladio Aguirre Rivero²⁴ como gobernador de la entidad, cuestionado por su cercana relación con el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, señalado como responsable de la desaparición de los normalistas.

En la negociación entre el gobierno federal y el PRD, se acordó que el relevo de Aguirre fuera el universitario Rogelio Ortega Martí-

²⁴ Ayotzinapa significó para el ex gobernador Ángel Aguirre un punto de quiebre del amplio poder que acumuló en Guerrero. Al inicio de su gobierno dos estudiantes de Ayotzinapa perdieron la vida el 12 de diciembre de 2011, durante una protesta en la carretera federal que entronca con la Autopista del Sol, en Chilpancingo, hecho por el cual fueron cesados su procurador de Justicia, Alberto López Rosas, y el secretario de Seguridad, Ramón Almonte.

nez, el cual de inicio contó con el aval de la mayoría de las fuerzas políticas de la entidad, con excepción de Movimiento Ciudadano, quien promovió al también universitario Florentino Cruz Ramírez. El gobernador sustituto enfrentó la crisis política a través de dos ejes: 1) permitió el cauce de las manifestaciones de protestas, a las que denominó violencia simbólica,²⁵ para distinguirla de otro tipo de violencia política que criminalizara el movimiento y legitimara una salida violenta al conflicto, siempre latente por el nivel de intensidad de las protestas, y 2) estableció canales secretos, informales y permanentes, de negociación con los actores políticos que encabezaban el movimiento, la mayoría de los acuerdos alcanzados de esta manera se han mantenido en la secrecía, sólo se hizo pública la negociación que llevó a cabo el gobernador con una fracción radical del MPG en mayo de 2015,²⁶ como contraparte, este movimiento entregó al gobierno algunos ayuntamientos que aún mantenía tomados, como el de Chilpancingo.²⁷

Las acciones de protesta que el MPG acordó realizar para boicotear o posponer el proceso electoral en Guerrero fueron: tomar los 81 ayuntamientos y las nueve sedes del Instituto Nacional Electoral (INE) de manera indefinida, y de manera directa la destrucción de propaganda y papelería electoral donde les fuera posible. En noviembre de 2014, quizá el momento más álgido del movimiento, sumaron 42

²⁵ La violencia simbólica, atribuida a las acciones violentas del MPG contra edificios sedes del poder político, tiene aquí una connotación diferente a la definición clásica de Pierre Bourdieu, quien la utiliza para describir una acción racional donde el “dominador” ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los “dominados” (citado en Peña Collazos, 2009). Así lo expresó el gobernador Rogelio Ortega: “Prefiero mejor que vayan con esa VIOLENCIA SIMBÓLICA contra la infraestructura, contra los inmuebles, a que haya la pérdida de una vida humana”, en *El Financiero*, 30 de octubre de 2014, disponible en <<http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/no-habra-represion-para-vandalos-y-saqueadores-promete-gobernador-de-guerrero.html>>.

²⁶ “Firman pacto, pero seguirán protestas, negocian en Guerrero ley de amnistía”, en *Excelsior*, 10 de mayo de 2015, disponible en <<http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/10/1023301>>.

²⁷ Tixtla, sede de la escuela normal de Ayotzinapa, fue entregado al gobierno el 9 de julio de 2015, en *Terra*, disponible en <<http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/devuelve-ceteg-alcaldia-de-tixtla,c4feba22ffbc90244853c2223>>.

ayuntamientos y cinco sedes distritales del INE tomadas.²⁸ El movimiento fue entregando de manera paulatina estos edificios a las autoridades locales, tras las negociaciones con el gobierno y el desgaste político que significó la larga ocupación de estos edificios.

En tanto, los preparativos de la jornada electoral se fueron realizando en sedes alternas y con algunos retrasos en los distritos de Tlapa y Chilpancingo. Tlapa fue escenario de la mayoría de los actos de boicot al proceso electoral. Ejemplo de ello fueron las acciones del MPG en el local del INE, buscaban al vocal ejecutivo del distrito 05, Salvador Basurto Espinobarros, con la intención de obligarlo a firmar un documento donde se comprometía a no realizar las elecciones; Salvador Basurto fue retenido con otros dos funcionarios electorales, se negó a firmar el documento y logró escapar con otro funcionario, sin embargo, el tercero, Alberto González, chofer del consejero, fue llevado a una cárcel comunitaria, golpeado y después liberado. En otra acción, también en Tlapa, el MPG sustrajo y quemó de la sede distrital 28 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC) 87 mil boletas destinadas a la jornada electoral del 7 de junio.²⁹

Las acciones contra las campañas se centraron en la irrupción en diversos actos públicos, los más relevantes (véase la tabla 3) fueron en contra de los candidatos a gobernador de Morena, del PRI y de

ebd3676gebRCRD.html>. El último ayuntamiento que mantuvo tomado el MPG fue el de Ayutla, en la región Costa Chica, el cual fue recuperado por las nuevas autoridades municipales el 17 de enero de 2016, información disponible en *El Universal*: <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/01/17/recupe-ran-ayuntamiento-tras-15-meses-de-toma-en-ayutla>>.

²⁸ Entre los 28 ayuntamientos tomados figuran: Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Técpan, Iguala, Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Metlatónoc, Alpoyeca, Copanatoyac, Huamuxtitlán, San Luis Acatlán, Tlapa, Chilapa, Tixtla, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlan, Cualác, Olinalá, Ayutla, Mártir de Cuilapan, Atoyac, Petatlán, Ometepec y Malinaltepec; en tanto que las sedes distritales del INE fueron las dos de Acapulco, Chilpancingo, Ayutla y Tlapa.

²⁹ “El MPG ‘revienta’ una sesión del INE”, en CNN México, el 4 de abril de 2015, disponible en <<http://mexico.cnn.com/adnpolitico/2015/04/04/el-movimiento-popular-guerrerense-revienta-una-sesion-del-ine>>. “Queman 87 mil boletas en Tlapa, Guerrero”, en *Proceso*, 1 de junio de 2015, disponible en <<http://www.proceso.com.mx/?p=406089>>.

MC, con el propósito de boicotear sus actos proselitistas; no pasó a mayores. El rechazo a la celebración de las elecciones se manifestó también a través de la destrucción de propaganda electoral de casi todos los partidos políticos, así como la destrucción o quema de lonas y propaganda colocada en los llamados “espectaculares”.

Los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos mantuvieron su postura de que en Guerrero no había condiciones para las elecciones del 7 de junio. Hicieron esta propuesta al INE, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, los recibió y les expresó su solidaridad, pero dejó claro que la institución electoral estaba obligada a organizar las elecciones. También hicieron este planteamiento al Senado de la República, sin mayores expectativas.

Con todos estos antecedentes, la jornada electoral en Guerrero era “foco rojo” para las autoridades políticas y electorales en el país. Las miradas estaban puestas en Tixtla, Chilapa, Tlapa, Chilpancingo, Telloapan, Iguala, Ahuacutzingo y Ciudad Altamirano. Sin embargo, los canales de negociación establecidos por los gobiernos local y nacional con las organizaciones más representativas del MPG, como la Ceteg, la CRAC y la UPOEG, dieron frutos. La mayor parte del movimiento se replegó y el gobierno ofreció no militarizar la elección. Las acciones de boicot más fuertes se redujeron a los municipios de Tixtla y Tlapa. El saldo de estas acciones contra el proceso electoral fue de 51 casillas robadas o destruidas (1.06%) de las 4 806 aprobadas para la entidad: 15 paquetes electorales correspondían al distrito electoral federal 05 de Tlapa, dos de ellos robados en días previos a la elección; cuatro del distrito de Chilpancingo, 26 casillas correspondían al municipio de Tixtla, lo cual derivó en la anulación del proceso electoral en este ayuntamiento, sede de la normal de Ayotzinapa; el robo de tres paquetes electorales en el distrito 01 de Ciudad Altamirano (Pungarabato) en forma posterior a la jornada electoral; y tres en el distrito electoral federal 02 de Iguala.³⁰

Los incidentes más violentos ocurrieron en Tixtla y Tlapa. Los padres de los normalistas desaparecidos y estudiantes de la normal de

³⁰ “56.74%”, David Alejandro Delgado, vocal ejecutivo del INE en Guerrero, 6 de julio de 2015, información disponible en <<http://dadaine.blogspot.mx/2015/07/5674.html?m=1>>.

Ayotzinapa desde temprano recorrieron las casillas de Tixtla para pedir a los funcionarios electorales que les entregaran la paquetería electoral, algunos presidentes de casillas accedieron, pero otros no y se presentaron conatos de violencia entre funcionarios y ciudadanos que acudían a votar, y estudiantes que promovían el boicot armados con palos. Debido a la intensidad de las protestas, el IEPC de Guerrero anunció al mediodía la suspensión de las elecciones, pero el INE informó más tarde que el proceso electoral continuaría.

En Tlapa, miembros del MPG incendiaron una camioneta oficial del INE, como respuesta policías estatales y federales acudieron al centro de operación de la Ceteg y se llevaron a nueve maestros. Ante este hecho el MPG retuvo tres camionetas con 35 policías federales, como presión para que les regresaran a los profesores detenidos. Los policías federales ingresaron a la capilla de la colonia Tepeyac, donde se atrincheraron los miembros del MPG con los policías retenidos. En la confrontación falleció el maestro Antonio Vivar Díaz.

A pesar de las protestas, las instituciones electorales y políticas de la entidad, así como numerosas organizaciones moderadas que integraban el MPG, abonaron hacia el camino de la normalidad electoral. La estrategia dialoguista de bajo perfil y la reticencia a favorecer una salida violenta al conflicto político, implementadas por el gobierno, funcionó a juzgar por el hecho de que en la entidad se pudieran realizar las elecciones, y con una participación electoral (56%) por arriba del promedio nacional.

BREVE BALANCE DE LOS DESAFÍOS DE LAS VIOLENCIAS

Una somera recapitulación de cómo las violencias aquí expuestas incidieron o han influido en la dinámica política y, en particular, la electoral en Guerrero, muestra algunos puntos de alerta para las instituciones políticas locales y federales.

En primer lugar, resalta la sistemática amenaza de los grupos del crimen organizado a la clase política y funcionarios de gobierno, lo cual ha incrementado las acciones de violencia contra actores políticos en Guerrero. La paulatina colonización de las estructuras del

poder político por parte del crimen organizado se observa de manera alarmante en el ámbito municipal, y lo hacen a través de los procesos electorales, incidiendo en los procesos internos de los partidos políticos, o de manera directa mediante la presión hacia las autoridades electas para tener ciertas libertades y desarrollar sus actividades ilegales. Los ayuntamientos —convertidos en un espacio de caza para estas organizaciones— y las elecciones cumplen así funciones permisivas o legitimadoras de las actividades delincuenciales. Por lo tanto, se espera que después de las elecciones, la violencia seguirá su curso, y las nuevas autoridades electas decidirán entre una ética de ejercer el poder para bien de las mayorías o salvaguardar su vida y ceder ante las presiones criminales.

En segundo lugar, se puede afirmar que las violencias han afectado la normalidad del proceso electoral. Aunque se puede celebrar que el proceso electoral no se interrumpiera, como lo reclamaba el Movimiento Popular Guerrerense, hay indicios preocupantes para el proceso democrático, en especial:

1. Disminución significativa de la participación ciudadana en algunos municipios con mayor incidencia delictiva: Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Tlapa, quienes registraron las tasas más bajas de participación electoral en la entidad.
2. Incremento de renunciadas ciudadanas a participar como funcionarios de casilla, en este proceso 11% de estos funcionarios fueron habilitados por ciudadanos que se encontraban formados esperando votar, frente al 2.8% de 2012 (IEPC, 2016); esta situación se asocia inevitablemente al temor de los funcionarios seleccionados a que sufrieran algún tipo de violencia por parte de la delincuencia, o agresiones de los grupos adversos a que se celebrara la jornada electoral.
3. La presunta participación de candidaturas apoyadas por el crimen organizado, esto se refleja en aquellos espacios territoriales donde estos grupos impiden la entrada de candidatos o intimidan a algunos candidatos para que dejen de realizar sus actividades proselitistas, es decir, son territorios altamente inseguros para realizar campañas, como les sucedió a las candidatas de Morena en Chilapa y Acatepec.

En tercer lugar, y ligado al punto anterior, es posible que algunos resultados electorales sean producto de la influencia del crimen organizado; aunque no hay suficientes elementos de prueba, las amenazas hacia candidatos en varios municipios tuvieron el propósito de apoyar a algunas candidaturas, muchos de estos casos no trascendieron al ámbito público, a través de los medios de comunicación o la denuncia legal, por temor a consecuencias fatales.

Por último, la derrota electoral del PRD en las elecciones de 2015 en Guerrero (perdió el ejecutivo estatal, la mayoría en el Congreso local y de los ayuntamientos) no se explica sin los efectos que tuvo la crisis política por la “tragedia de Iguala”. Este suceso tuvo altos costos políticos para dicho partido: la interrupción del gobierno que encabezaba Ángel Aguirre; la fractura de su coalición política con MC, su aliado tradicional; sus divisiones internas, en particular con buena parte de la corriente que lidera el ex gobernador Aguirre Rivero, quienes migraron hacia otros partidos (sobre todo al PRI y a MC) para ocupar candidaturas a cargos en el gobierno y de representación política.

NOTAS FINALES

La elección de junio de 2015 en Guerrero enfrentó el mayor desafío que haya tenido el proceso electoral democrático en México. El clima de violencia criminal y política auguraba un escenario catastrófico, como lo sería la anulación del proceso electoral. Afortunadamente nada pasó. Guerrero tuvo elecciones, incluso con una participación ciudadana superior a la media nacional. Hasta ahí las buenas noticias.

Como se ha argumentado en este trabajo, las difíciles condiciones que enfrentó el proceso electoral en la entidad siguen vigentes; por un lado, la “balcanización” de la geografía guerrerense por la disputa entre las organizaciones del crimen organizado; y, por el otro, el movimiento popular que demanda la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos se ha reactivado como resultado de los cuestionamientos a la versión oficial de los hechos.

Sobre el primer punto, aquí se ha expuesto que el proceso electoral se ha convertido en un medio para legitimar la ampliación de la influencia del crimen organizado en sus territorios colonizados, de mo-

do que la debilidad institucional de las estructuras de los gobiernos municipales son cooptadas por una fuerza criminal incontestable. Así, el proceso electoral resulta ser su mecanismo legitimador. La violencia permea a todas las estructuras políticas partidistas, con el propósito de influir en sus decisiones sobre el reclutamiento de la clase política gobernante o la designación de funcionarios permisivos de sus actividades criminales. Ante esta situación, el Estado mexicano tiene uno de los mayores desafíos, de otro modo, los procesos políticos institucionales, como el electoral, seguirán reflejando el nivel de la cruenta disputa entre los poderes fácticos que se disputan el control territorial para sus actividades delictivas.

El conflicto político suscitado por los sucesos de Iguala aún está vivo, y seguirá siendo el catalizador de agravios acumulados en la conciencia colectiva, de ahí su elevado valor simbólico. Al cierre de estas líneas y a tres días de su primer aniversario, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desmontó la “verdad histórica” que presentó el gobierno federal sobre el destino de los 43 normalistas desaparecidos. La investigación del caso regresó al punto inicial: nada. Por tanto, las protestas seguirán, quizá con mayor intensidad. Habrá que esperar la respuesta del gobierno a este desafío, que ha minado la legitimidad política de la institución presidencial, y de buena parte de las estructuras del Estado mexicano. Sin duda, una salida violenta al conflicto siempre está latente, aquí se señala con la aspiración de que no suceda; el diálogo y la negociación demostraron ser positivos en este tramo de arribo a la jornada electoral del 7 de junio de 2015. Pero en Guerrero llega un nuevo gobierno emanado del PRI, los lazos que acercaron al movimiento a las esferas institucionales pueden romperse y derivar en mayor violencia, caminando sobre derroteros ya explorados en la política local guerrerense: la represión y la violencia.

BIBLIOGRAFÍA

ARÓSTEGUI, Julio

- 1996 “La especificación de lo genérico. La violencia política en perspectiva histórica”, en *Sistema*, núm. 132-133, Logroño, Fundación Sistema/Universidad de la Rioja, pp. 9-30.

ARTEAGA BOTELLO, Nelson

2007 “Repensar la violencia. Tres propuestas para el siglo XXI”, en *Trayectorias*, año IX, núm. 23, enero-abril, Monterrey, UANL, pp. 43-54.

FERNÁNDEZ GÓMEZ, Raúl

2014 “Guerrero: el fondo de la crisis”, en *Voz y Voto*, núm. 262, diciembre, México, pp. 8-11.

HERNÁNDEZ NORZAGARAY, Ernesto (coord.)

2010 *Elecciones en tiempos de guerra*, México, Universidad Autónoma de Sinaloa.

IMBUSCH, Peter; Michel MISSE y Fernando CARRIÓN

2011 “Violence Research in Latin America and the Caribbean: a Literature Review”, en *International Journal of Conflict and Violence*, vol. 5, núm. 1, IJCV, pp. 87-154.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)

2014 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Principales resultados Guerrero, México, INEGI.

2010 Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, México, INEGI.

KYLE, Chris

2015 “Violence and Insecurity in Guerrero”, México/San Diego, Mexico Institute/Woodrow Wilson Center/University of San Diego (Briefing Paper Series).

MOLOEZNİK, Marcos Pablo (comp.)

2013 *¿Qué es la seguridad ciudadana?*, México, EAPDF/Porrúa.

SOLANO, Gabino y Margarita JIMÉNEZ

2013 “Panorama de la violencia en el proceso electoral de Guerrero, 2012”, en Angélica Cazarín Martínez, Javier Arzuaga y Luis E. Medina (coords.), *Partidos y elecciones en la disputa nacional*, México, Somee/IFE, pp. 321-351.

TILLY, Charles

2003 *The Politics of Collective Violence*, Cambridge, Cambridge University Press.

TORRES-RIVAS, Edelberto

1996 “Tras la violencia y el miedo, la democracia: notas sobre el terror político en América Latina”, en Fernando Reinares

(coord.), *Sistemas*, núm. 132-133, número temático: Violencia Política, junio, Costa Rica, Flacso, pp. 73-88.

VALDEZ ZEPEDA, Andrés y Abraham PANIAGUA VÁZQUEZ

- 2011 “Criminalidad, inseguridad pública y comportamiento de los electores: un análisis del proceso electoral estatal 2010 en Ciudad Juárez, Chihuahua”, en *Estudios Fronterizos*, nueva época, vol. 12, núm. 23 (enero-junio), Mexicali, UABC, pp. 49-78.

Fuentes electrónicas

GUERRERO, Eduardo

- 2014 “Guerrero en crisis”, en *Nexos*, noviembre, México, disponible en <<http://www.nexos.com.mx/?p=24035>>.
- 2015 “¿Bajó la violencia?”, en *Nexos*, febrero, México, disponible en <<http://www.nexos.com.mx/?s=%C2%BFBaj%C3%B3+la+violencia%3F>>.

MATA, Miguel Ángel

- 2015 Libertad Guerrero Noticias, 22 de agosto de 2015, disponible en <<http://www.libertadguerrero.net/2014/10/de-frente-el-otro-gobierno.html>>.

MICHEL, Víctor Hugo y Javier TRUJILLO

- 2014 “Guerrero: ‘narco’, guerrilla y bandas, en 62 municipios”, en *Milenio Diario*, 24 de noviembre, México, disponible en <http://m.milenio.com/policia/En_Guerrero_hay_presencia_de_narco_guerrilla_y_bandas_en_62_municipios_0_415158485.html>.

PEÑA COLLAZOS, Wilmar

- 2009 “La violencia simbólica como reproducción biopolítica del poder”, en *Revista Latinoamericana de Bioética*, núm. 9, julio-diciembre, Bogotá, Universidad Militar Nueva Granada, pp. 62-75, disponible en <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=127020306005>>.

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SESNSP)

- 2016 “Incidencia delictiva”, México, SESNSP-Segob, disponible en <<http://secretariadoejecutivo.gob.mx/index.php>>.

SOLÍS, Leslie y Lilian CHAPA KOLOFFON

2014 “Guerrero, Tamaulipas y Michoacán: ¿estados seguros?”, en Centro de Análisis de Políticas Públicas: México Evalúa, disponible en <file:///C:/Users/PERSONAL/Desktop/Guerrero,%20Tamaulipas%20y%20Michoac%C3%A1n_%20%C2%BFestados%20seguros_.html>.